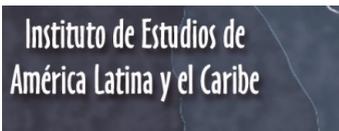


Honduras 2013

Golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político

Esteban De Gori (ed.)



Serie Académica

Honduras 2013 : golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político / Esteban De Gori ... [et.al.] ; edición literaria a cargo de Esteban De Gori. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sans Soleil Ediciones Argentina, 2015.
E-Book.

ISBN 978-987-45205-2-4

1. Sociología. 2. Política Latinoamericana. I. De Gori, Esteban II. De Gori, Esteban, ed. lit.

CDD 320.098

Obra editada bajo licencia Creative Commons 3.0:
Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada
(by-nc-nd)

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Siempre que se utilice esta obra tendrá que reconocerse su autoría.

-© 2014, de los autores

-© 2014, de la edición, Sans Soleil Ediciones Argentina.

Se puede por tanto compartir esta obra siempre y cuando se respeten las condiciones de la licencia Creative Commons.

Diseño de la portada: Sans Soleil Ediciones

Maquetación: Sans Soleil Ediciones

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, <i>Esteban De Gori</i> ,	6
1. CRISE RIMA COM AMÉRICA CENTRAL: O JOGO QUE NÃO TERMINA EM HONDURAS E A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL, <i>Aleksander Aguilar</i>	8
2. EL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS TRAS LAS ELECCIONES DE 2013, <i>Natalia Ajenjo</i>	17
3. ESTADO DE DERECHO, ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN HONDURAS: ¿HACIA UNA DEMOCRACIA PLURAL O HACIA UNA GOBERNABILIDAD AUTORITARIA Y TUTELADA?, <i>Marvin Barahona</i>	27
4. INTERPRETACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA Y EL PROCESO ELECTORAL DE 2013, <i>Álvaro Calix</i>	34
5. LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO EN HONDURAS: APRENDIZAJES PARA CENTROAMÉRICA, <i>ELVIRA CUADRA LIRA</i>	46
6. ZELAYA: DEL PALACIO A LA PLAZA, <i>ESTEBAN DE GORI</i>	53
7. HONDURAS: TESTIMONIO DE UNA RESISTENCIA, <i>KATIA LARA</i>	62
8. CRÓNICAS POLÍTICAS, <i>ARIEL MAGIRENA</i>	74
9. LOS PARTIDOS EN HONDURAS TRAS EL 2009: NUEVOS ACTORES, NUEVOS RETOS, <i>PATRICIA OTERO FELIPE</i>	80

10.	PARTIDO LIBRE: FIN AL BIPARTIDISMO Y ¿AHORA QUÉ?, <i>MARIELA PINZA</i>	94
11.	LA POLITIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO “ENEMIGO INTERNO”, <i>KRISTINA PIRKER</i>	103
12.	¿DEMOCRACIA PARA LA SEGURIDAD DE QUIÉNES?, <i>SILVINA M. ROMANO</i>	112
13.	VEINTE TOMAS DE LA PELÍCULA: ELECCIONES EN HONDURAS, <i>ALFREDO SERRANO MANCILLA</i>	121
14.	HONDURAS ELECCIONES 2013: ENTRE EL TRIUNFO CUESTIONADO DE LAS FUERZAS GOLPISTAS Y EL AVANCE DE LA IZQUIERDA SUR- GIDA DE LA RESISTENCIA, <i>EUGENIO SOSA</i>	125
15.	HONDURAS-EL SALVADOR: LA COMPLICIDAD DE LAS DERECHAS, <i>CARMEN ELENA VILLACORTA</i>	134
16.	EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS EN HONDURAS, <i>SONIA WINER</i> ...	142

¿DEMOCRACIA PARA LA SEGURIDAD DE QUIÉNES?

Silvina M. Romano
(silvinamcelesteste@gmail.com)

Desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, Honduras se ha transformado en el epicentro de la lucha contra el “crimen organizado” en Centroamérica, bajo el liderazgo del Comando Sur estadounidense. Esto no se reduce a la aplicación de políticas tendientes a la militarización (lo que incide en el recorte/anulación de los derechos y prácticas democráticas), sino que se trata del correlato de medidas económicas tendientes a profundizar el patrón primario-exportador y dependiente de Honduras, con las ya conocidas consecuencias para la mayoría de la población que vive en la pobreza.

LA RE MILITARIZACIÓN DE HONDURAS

La campaña electoral de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras se basó en una “receta para acabar con la delincuencia: sacar los militares a la calle” (América Economía, 25 noviembre 2013).

Lo anterior no solo hace visible la continuidad de la militarización en la región, sino que es sugerente que este tipo de frases sean publicadas en espacios de información para “empresarios”, como América Economía. De modo que se trata sin dudas de la promoción de la idea de que Honduras se “pondrá serio” en asuntos de seguridad, para garantizar la inversión y

mantener una cierta estabilidad. Por otra parte, esta re militarización requiere de infraestructura y recursos, que están por cierto asociados al lanzamiento del Acuerdo para la Seguridad de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés), orquestado por el gobierno estadounidense.

Según la información brindada por el Departamento de Estado estadounidense, el CARSI plantea como el primero de sus objetivos de “seguridad ciudadana” generar “Calles seguras” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2013). Seguridad que puede incluir el recorte de los derechos constitucionales y la justicia (ver: Romano, 2012). Para brindar un solo ejemplo, vale señalar que la candidata a presidente por el partido Libre en las elecciones de noviembre de 2013, Xiomara Castro, no solo se “quejó” de las prácticas fraudulentas, sino que llevó la denuncia a la justicia por los medios institucionales disponibles, actitud que es percibida por la prensa internacional (del *establishment*) como una acción que podría llevar a la “inestabilidad política” (Phillips y Malkin, 30 noviembre 2013). Es decir, todo aquello que en algún momento se asoció a la democracia, ahora es anulado en nombre de la “paz” o la “pacificación”.

Para contrarrestar este tipo de amenazas a la “estabilidad” está el Comando Sur como eslabón fundamental de la lucha contra el “narcotráfico”, operando a través de planes como la “operación martillo”, que según sus líderes -y a pesar de recortes presupuestarios- “continuará indefinidamente en Honduras y en toda el área. No vamos a detenernos en este esfuerzo por erradicar el narcotráfico” (La Prensa.hn, 10 septiembre 2013). Todo vale en una guerra contra un enemigo interno/transnacional de una ambigüedad y un alcance inconmensurable: El jefe de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial-Sur de los Estados Unidos dijo que si tuviera los recursos, no dudaría en utilizar vehículos aéreos no tripulados (drones) para apoyar a las autoridades hondureñas en el combate conjunto que

libran contra el narcotráfico (La Prensa.hn, 4 septiembre 2013).

El nivel de injerencia en la soberanía (no solo de Honduras sino de Centroamérica) es alarmante, sobre todo si consideramos el rol histórico que ha tenido Estados Unidos en asuntos de "seguridad", al menos desde la Guerra Fría. Además, no se trata solo de eso, sino que esta lucha conjunta contra el narcotráfico sirve como plataforma para influenciar en la toma de decisión de cualquier otro ámbito, tarea muy bien llevada a cabo (aunque sea absolutamente ilegal) por los miembros de la embajada estadounidense en Honduras.

En las últimas elecciones, el rol de los diplomáticos en la definición de los resultados, es inocultable. Según un periodista de *The Guardian*, "El interés más importante proviene de Washington, que invirtió más de 11 millones de dólares, y quiere legitimar a su aliado, el Partido Nacional, tal como lo hizo, de modo aún más descarado en las elecciones ilegítimas que se llevaron a cabo hace cuatro años luego del golpe militar" (Weisbrot, 3 diciembre 2013). Como siempre, estas acciones fueron "legalizadas" por la OEA que aprobó el resultado de las elecciones de noviembre, consagrando su "destino manifiesto" de estar incondicionalmente al servicio de la política exterior estadounidense y las elites locales (ver: Romano, 2013).

LA INTERVENCIÓN PARA EL "DESARROLLO" (DE LA INVERSIÓN PRIVADA QUE PROFUNDIZA LA DEPENDENCIA)

La plataforma de la lucha contra el narcotráfico, como decíamos, abre el abanico de oportunidades para intervenir desde lo militar hasta las reformas y elaboración de leyes (reforma fiscal, ley de minería, etc.), incluyendo un aspecto fundamental, que es la "asistencia para el desarrollo". La Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) es la que se encarga de que funcione lo que sería el "cuarto pilar" del CARSÍ (si hacemos un paralelismo

con la Iniciativa Mérida). Así, en los lineamientos de este organismo se conjuga claramente una idea particular de desarrollo (dependiente) con un paradigma de seguridad articulado en torno al softpower (poder blando, que incluye: asistencia, manejo de medios de comunicación, programas de capacitación e intercambio, etc.), poder que en los hechos descansa en la fuerza militar: “La USAID busca construir una mayor cohesión social, reforzar la gobernanza local, mejorar la infraestructura física y social, y educar y empoderar a los jóvenes para enfrentar los problemas que los llevan a involucrarse en actividades criminales” (USAID Honduras, 2013).

Los intereses de fondo del discurso de la (in)seguridad no difieren de las premisas de la “división internacional del trabajo” de principios de siglo XX, pues buscan la consolidación de la posición de Honduras en el mercado internacional como primario-exportadora, como plataforma de exportación y como espacio especialmente favorable a la maquila (aprovechando la fuerza de trabajo barata).

Así, se promociona que Honduras brinda excelentes “oportunidades de negocio” para energía, minería, turismo, infraestructuras y agro negocios de la mano del nuevo marco legal que facilita las asociaciones público-privadas, la normativa Empleo por Horas, ventanilla única de inversión, unidad de protección al inversor, y por supuesto, programas para la disminución de la “inseguridad” (OMAL, 2011).

Con respecto a la energía, es el punto de partida para la explotación del turismo, pero sobre todo para minería. Está en marcha el proyecto hidroeléctrico Patuca III (300 millones de dólares) y se prevén otras inversiones en el sector por 380 millones más (Ibid.).

Las exportaciones mineras al cierre de 2012 llegaron a 250 millones de dólares y a 200 millones en 2011. El material “revelación 2013” es el óxido de hierro que alcanzó más de 90.000

toneladas (12.6 millones de dólares) en los últimos meses del año. Entre enero 2011 y enero 2013, las ventas de hierro y sus manufacturas pasaron de 9 millones a 24 millones de dólares (Central America Link, 6 diciembre 2013). Los principales inversores en minería son China, Inglaterra, Perú, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Otro producto no tradicional que genera mayor cantidad de divisas es la palma africana (Central America Link, 20 diciembre 2013). El lamentable resultado es que se sustituye la agricultura de subsistencia (diversificada) por el monocultivo de exportación, es decir, en lugar de resolver las necesidades de las comunidades, siguen imperando las necesidades del mercado. Se explica del siguiente modo: "Para cubrir las necesidades de una familia rural se necesitan al menos 14 manzanas de Palma Africana y se sabe que son suficientes 5 manzanas de agricultura diversificada para el mismo fin, sin contar con el factor de la fluctuación de precios del fruto y del aceite de la palma que lo dicta el mercado internacional o las amenazas de plagas que azotan más fuertemente al monocultivo que a los cultivos tradicionales por estar en ecosistema diversificado" (Aguilar, 2011).

El asunto es que esto data desde la "revolución verde" de los '60, impulsada en buena medida por el Departamento de Agricultura estadounidense y la USAID. De hecho, esta última sigue liderando ese tipo de "reconversiones" en nombre de la economía verde y los cultivos alternativos a la coca, siendo la experiencia colombiana realmente aleccionadora en cuanto a los intereses que pueden estar ocultos tras la fachada del cuidado de la naturaleza (ver: Ballvé, 2009).

Por otra parte, esta tendencia a satisfacer las necesidades del mercado, es el indicador más claro de la consolidación de la economía hondureña como plataforma de exportación. La maquila automotriz es especialmente importante para las empresas transnacionales estadounidenses, japonesas, chinas, taiwa-

nessas, etc. Algo similar sucede con el procesado y empaquetado de comida, que es el nicho más importante de las transnacionales estadounidenses, que empaquetan productos agrícolas “no tradicionales” como melones, mangos, verduras de invierno, camarones, chile jalapeño, flores, etc. (US Commercial Service, 2012). A su vez, Honduras se convierte en un mercado interesante, en particular para empresas estadounidenses que acaparan el rubro de “comida importada”, pues “existe una fuerte preferencia por los productos estadounidenses, que son percibidos como de alta calidad y de altos niveles sanitarios, la ventaja es que las marcas estadounidenses ya son reconocidas” (Ibid.).

Lo importante es que todos estos “avances” en la economía Hondureña, que cuenta con un 60% de su población (sobre)viviendo por debajo de la línea de la pobreza, genera las condiciones adecuadas para que el nuevo presidente negocie un préstamo con el FMI que tendrá como eje el replanteo de la “situación fiscal del gobierno central” (Central America Link, 16 diciembre 2013). Es decir, el FMI impondrá una vez más el modo “correcto” de hacer las cosas, en una línea ya conocida en América Latina destinada a distanciarse lo más posible de la redistribución justa de recursos y riqueza.

EL NEGOCIO DE LA (IN)SEGURIDAD

Pero sin dudas, uno de los mercados más rentables es el de la inseguridad, no sólo a nivel estatal sino en el sector privado (que por cierto, son difícilmente distinguibles). Lo importante es que hay armas para todos. Según uno de los informes del Servicio Comercial de Estados Unidos (US Commercial Service, 2012), se estima que el mercado de la “seguridad y equipos de seguridad” crecerá un 40% en los próximos tres años. La mayoría de los productos y servicios vinculados a este nicho son importados, y Estados Unidos provee el 80% de los mismos. Entre

ellos encontramos: alarmas, sensores y sistemas de seguridad computarizados. Además, como los secuestros están a la orden del día, aumentó la demanda de sistemas de alarma electrónicas, circuitos de tv cerrados, vidrios y ventanillas blindadas y autos blindados. En el ámbito público, el Ministerio de Seguridad “autorizó por medio de un decreto, a realizar compras directas de tecnología moderna para aumentar la seguridad”(Ibid.).

En la tabla n°1 puede observarse con claridad el modo en que Honduras, un pequeñísimo país, ha superado colosalmente la compra de armas a Estados Unidos, comparado nada más y nada menos con Colombia y México, que son los países que mayor presupuesto han dedicado a defensa y seguridad en los últimos diez años.

Tabla n° 1: Venta de armas y equipos de EEUU a Honduras, México y Colombia (en dólares EEUU)				
	2008	2009	2010	2011
Honduras	9,597,745	5,002,600	768,843	1,391,219,958
México	749,985,108	974,901,419	475,061,022	377,114,824
Colombia	419,145,722	240,651,999	538,137,238	287,501,064
Fuente: elaboración propia en base a datos de Just the Facts, 2013 http://justf.org/All_Sales_Country				

Esta re militarización no se reduce al ámbito de la seguridad. Esto sucede en el marco de un gobierno “democrático”, que ahora promete acabar con la inseguridad sacando a las fuerzas armadas a la calle y recurriendo a cualquier medio “Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la seguridad en Honduras” (Star Media, 26 noviembre 2013).

¿Será casualidad que en Guatemala también haya llegado a la presidencia Otto Pérez Molina con el lema de “mano dura” para combatir la inseguridad? (ver: Romano, 2012)

¿DE QUÉ DEMOCRACIA HABLAMOS?

En el caso de Honduras, luego del golpe de Estado de 2009, se profundizó la tendencia de democracia de fachada. Ya ni siquiera se discute el abismo entre democracia procedimental y sustantiva (es decir, el modo en que lo formal se traduce en lineamientos orientados a plasmar la democracia en la práctica), sino que parece “desubicado” reclamar que se cumplan los requisitos de la democracia formal. Las fraudulentas elecciones de noviembre de 2013 son una clara muestra de que el sistema democrático imperante “no funciona”, o más bien, que funciona para la minoría privilegiada que parece que ya no está dispuesta siquiera a dejar abierta la mínima brecha de cambio que puede implicar el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho. Así reacciona la minoría en el poder: “La Corte Suprema de Honduras rechazó un recurso de amparo que pretendía invalidar los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado, que según el partido derrotado, del ex presidente Manuel Zelaya, fueron fraudulentas. La corte no explicó el motivo de su rechazo” (BBC, 25 septiembre 2013, las cursivas son nuestras).

Lo mismo sucedió en dos elecciones presidenciales consecutivas en México, caracterizadas por un descarado fraude electoral para evitar que asuma el gobierno un partido (PRD) que en sus programas proponía algún tipo de reforma vinculada a la redistribución de recursos y el rescate de la soberanía (Ver: Figueroa Ibarra, 2013). El problema es que al anular la salida institucional, es decir, al no reconocer la corrupción y manipulación del electorado y los intereses subyacentes, se está erosionando lo poco que quedaba de las bases democráticas, la (cada vez más débil) convicción que existía sobre este modelo como marco posible para reformas urgentes. Lo que demuestra esta impunidad es que el Estado de Derecho puede ser puesto al servicio de los poderosos, de modo que las supuestas ventajas que alberga este sistema en la teoría, están muy lejos de lo

que sucede en la práctica. Claro que este es una de las denuncias más contundentes del manifiesto comunista (que evidentemente no ha pasado de moda), que el discurso *all inclusive* de la democracia liberal pareció neutralizar al menos por medio siglo. Los hechos muestran que en países como Honduras las minorías privilegiadas siguen ancladas a los espacios de poder, decididas a no ceder ni un milímetro en la toma de decisión. Eso incluso atenta contra las premisas “minimalistas” de la democracia liberal procedimental defendida –a nivel discursivo– por estas élites.

Silvina M. Romano es doctora en Ciencia Política, Licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México; Posdoctora por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad (CIECS)-CONICET; Profesora del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.